

## RESOLUCIÓN N°21/2026 de 26 de febrero del 2026

Expediente N.º 2023-34-1-0000067

**VISTO:** el expediente en el que se tramita la denuncia formulada, contra la Exministra de Economía, Ec. Azucena Arbeleche por presuntas incompatibilidades en el ejercicio de su función.

### RESULTANDO:

- 1) que la JUTEP, con fecha 10 de marzo del 2023, recibió denuncia anónima mediante la cual se puso en conocimiento presuntas incompatibilidades en el ejercicio de la función de la Sra. Ministra de Economía y Finanzas, Ec. Azucena Arbeleche;
- 2) que, el denunciante expresó que la Ministra de Economía y Finanzas firmó una resolución con fecha 3 de agosto del 2022, por la que se declaró promovida la actividad de un proyecto de inversión presentado por la empresa [REDACTED] incluyendo la exoneración de importantes tributos;
- 3) que según se señaló en la denuncia, en la declaración de bienes e ingresos presentada por la ministra ante la JUTEP, se adjunta la información correspondiente a su esposo, [REDACTED] en la que este declara que su empleador es justamente [REDACTED] y según surge de su perfil de LinkedIn, [REDACTED] informa ser el Gerente General de dicha empresa;
- 4) que por oficio N°95/2024 de 27 de diciembre del 2024 se solicitó acceder al expediente del Ministerio de Economía y Finanzas a través del cual se tramitó el proyecto de inversión referido ut supra, recibiendo con fecha 3 de febrero del 2025 testimonio notarial del expediente 2021-5-1-0086323, el que luce agregado en las presentes actuaciones.

### CONSIDERANDO:

- 1) que con fecha 19 de marzo de 2025 se emitió informe letrado en el que se concluyó que la ministra violentó lo establecido en el art. 19 de la Ley N° 19.823

(Código de Ética en la Función Pública) que establece que, "si considerare dudosa la existencia de conflicto entre el interés público y su interés personal, el funcionario deberá informar de ello al superior para que este adopte la resolución que corresponda..." Asimismo, entiende que la jerarca no actuó acorde a lo dispuesto por el art. 9 lit. d) y 31 de la Ley N°19.823, al haber intervenido en el ejercicio de sus funciones en la tramitación o resolución de asuntos que impliquen un conflicto de interés o directamente haber intervenido con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentre vinculada profesional, laboral o familiarmente, de lo que puede derivarse un conflicto entre el interés público y el privado. Por lo que concluye que, en este caso, debió mediar por parte de la ministra, comunicación al Presidente de la República y excusarse de actuar. Señala asimismo que se violentó lo dispuesto por los artículos 8, 13, 15 y 32 de la Ley N°19.823.

**2)** que la firma de la citada resolución por parte de la ministra implica que ejerció su función con relación a una entidad privada a la que se encuentra vinculada familiarmente, lo que implica una violación de la prohibición expresa establecida por el artículo 31 de la Ley N°19.823 (Código de Ética de la Función Pública). Dicha prohibición es absoluta y no requiere que exista ilegalidad o un beneficio indebido; los funcionarios públicos no pueden ejercer su función en esas condiciones y la ministra lo hizo. El incumplimiento del Art.31 de la Ley 19.823 implicó a la vez la violación de los Artículos 16 y 13 inciso 2° de esa misma norma;

**3)** que, ante la divulgación de la noticia, fuentes no identificadas del Ministerio de Economía argumentaron ante la prensa que la resolución es el resultado de un procedimiento reglado, por lo que una vez que la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) emite su informe favorable a otorgar la exoneración, el ministro no puede apartarse de dicho informe vinculante. Al no incidir en dicha decisión, no se produce conflicto de interés posible. Es por ello que no resulta aplicable el artículo 31 de la ley 19.823". Entendiendo que ese argumento no es de recibo ya que se trata de una prohibición absoluta con lo que queda descartada la necesidad de analizar e interpretar los hechos: el funcionario no puede ejercer su función con relación a empresas con las que exista un vínculo familiar;

**4)** que la ministra firmó una resolución concediendo a una empresa de la que su



esposo es el gerente general. Respetar esta prohibición no implicaba que la empresa perdiera el derecho al beneficio que podía legítimamente corresponderle: bastaba con la ministra se excusara y delegara en quien correspondiere la firma de la resolución y eventualmente hiciera constar la situación por escrito tal como lo prevé el artículo 33 de la misma ley.

5) que una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 5 de febrero de 2015, estableció entre sus fundamentos para desestimar la impugnación de una empresa multinacional, que la COMAP "realiza un análisis técnico y aconseja al Poder Ejecutivo, que es quien, en definitiva, decide si concede o no el beneficio que la ley le habilita a conceder. La competencia para decidir, en definitiva, la ostenta el Poder Ejecutivo, en tanto los dictámenes de la COMAP –como se ha señalado desde la doctrina– no son vinculantes". Reiterando que ante la claridad de la prohibición establecida en el Art.31, ni siquiera hay que recurrir a este antecedente, pero lo menciona porque es la justificación que se ha intentado desde el Ministerio de Economía y Finanzas.

6) que del informe letrado de fecha 16 de junio de 2023 surge que: "...se desprende la existencia de una posible incompatibilidad en el presente caso. La Ley N.º 19.823 establece en su artículo 31: "(Prohibición de relaciones con actividad vinculada). - Queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado. La prohibición establecida en este artículo se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra realizadas a solicitud de una Administración comprendida en esta ley, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros. Esta prohibición se mantendrá durante un año, luego de que el funcionario respectivo haya cesado en sus funciones."

7) En efecto, del citado informe surge que:

a. según declaración jurada de la Ministra de Economía y Finanzas, presentada con

fecha 2022, la cual se encuentra publicada en la página web de la JUTEP, su cónyuge [REDACTED]

b. de la misma declaración jurada surge que su empleador es [REDACTED] con un sueldo liquido de \$ 354.534 (trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos uruguayos);

c. de su perfil personal en LinkedIn, surge que es Gerente General de [REDACTED] desde al año 2017;

d. la Ley 19.823 de 25 de setiembre de 2019, conocida como Código de Ética en la función pública, establece en su artículo 31 una prohibición denominada "prohibición de relaciones con actividad vinculada". Esta prohibición le veda al funcionario - publico – en este caso ministra- de ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentra vinculado profesional, laboral, familiarmente u otro vinculo, del cual pueda derivar un conflicto de interés público o privado;

e. en el caso de estudio del presente expediente, la Ministra Ec. Azucena Arbeleche, firma dicha resolución, mediante la cual se otorgaban beneficios a una sociedad anónima de la cual su cónyuge es el Gerente General;

f. la Jerarca advirtiendo tal situación, debió excusarse en la cuestión – dejando constancia por escrito- en cumplimiento de lo previsto por el artículo 31 de la Ley 19.823. Este artículo establece que, si durante su desempeño (como es el caso) resultare dudosa o estuviere cuestionada la configuración de alguna de las situaciones previstas en los artículos 27 a 32 de la ley, el funcionario deberá informarlo de inmediato y en forma pormenorizada por escrito a su superior jerárquico;

g. debió mediar comunicación al Presidente de la República, ya que los Ministerios forman parte del sistema orgánico Poder Ejecutivo y se encuentran subordinados a su jerarca, siendo su designación competencia del mismo;

h. por el artículo 9 literal d) de la Ley 19.823, se prohíbe al funcionario intervenir en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en la atención, tramitación o resolución de asuntos que impliquen un conflicto de intereses. Se presenta el



conflicto cuando los intereses personales, laborales, económicos y financieros de un funcionario están en pugna con el cumplimiento de los deberes y funciones de su cargo;

i) analizada la prohibición, que, como otras, establece lo que no se puede hacer, existe como contrapartida la obligación de todo servidor público de respetar la normativa. No debe obviarse la existencia del artículo 13 del Código de Ética en la Función Pública, el cual establece que la actuación de los funcionarios públicos debe ser proba, desarrollando una conducta honesta, recta e íntegra; debiendo evitar cualquier acción en el ejercicio de su función que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta pública; comúnmente conocido como “ser y parecer”. Esto exige reconocer que hay cosas que sin estar prohibidas no deben hacerse;

j. los funcionarios públicos, deben cumplir con las normas de conducta vigentes en nuestro derecho positivo, actuando con: buena fe, honestidad, lealtad, integridad y rectitud en el ejercicio de sus funciones (artículo 20 Ley 17.060, artículo 15 Ley 19.823), conocer y cumplir las normas que regulan su actividad funcional (artículo 8 Ley 19823), hacer primar el interés funcional frente a su interés privado, lo que se conoce como probidad (artículo 20 Ley 17.060, artículo 13 Ley 19.823), prevenir y evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses personales en el desempeño de sus funciones (artículo 19 Ley 19.823), informar a sus superiores ante la existencia de eventuales conflictos de interés, presentar declaración jurada de implicancias, evitar el uso indebido de la función pública (artículo 32 Ley 19.823);

k. la propia Ley establece que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, artículo 16 inciso 2 de la Ley N°19.823;

**8)** que de dicho informe se confirió vista a la Sra. Arbeleche, la que con fecha 25 de abril del 2025 presentó descargos,

**9)** que con fecha 18 de noviembre del 2025 se emitió informe final junto con el análisis de los descargos efectuados, no haciendo lugar a los mismos y ratificando in totum lo expresado en informe de 19 de marzo del 2025.

**ATENTO:** A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el artículo 8, 9 lit. d), 13, 15, 19, 31 y 31 de la Ley N°19.823 (Código de Ética en la Función Pública), art. 2 de la Ley 19.340 de 28 de agosto del 2015;

**EL DIRECTORIO DE LA JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA**

**RESUELVE:**

- 1) Notificar a la Sra. Azucena Arbeleche la presente resolución, por la que la Jutep, en su calidad de órgano de control superior en materia de corrupción ha resuelto que, al haber firmado la resolución que otorgó beneficios a la empresa [REDACTED] cuyo gerente general es su cónyuge, violentó las normas de conducta en la función pública, detalladas en el cuerpo de la presente.
- 2) Comunicar la presente resolución a la Presidencia de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas.
- 3) Publíquese. cumplido archívese.

Firmado por:

Presidente Dra. Ana María Ferraris

Vicepresidente Cr. Alfredo Asti